



PROCESOS ELECTORALES Y PARTIDOS POLÍTICOS: TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS EN LA DÉCADA DE LOS NOVENTA*

*Detlef Nolte***

Este trabajo ofrece un conjunto de reflexiones sobre las tendencias electorales recientes en América Latina y sobre las perspectivas políticas hacia el futuro, sustentados en el análisis de los cambios económicos, sociopolíticos y electorales, el desgaste político y la evolución de los partidos en el último decenio. Estas reflexiones se apoyan también en la configuración de la agenda política de los noventa donde se recuperan los principales desafíos para los actores políticos, sociales y gubernamentales en el campo de la pobreza, la redistribución de los ingresos, la educación, los servicios y, más en general, en el terreno de las políticas públicas.

Considerations regarding the results of recent elections in Latin America and political perspectives for the future, based on the analysis of change in the economic, socio-political, and election areas, political erosion, and the evolution of parties during the last decade. These refer also to the configuration of the political agenda of the 90's, in which the main challenges for political, social and government agents reappear in poverty, redistribution of income, education, services, and, in general terms, public politics.

Cambios electorales y desgaste político

Después del retorno a la democracia de casi todos los países de América Latina en los años ochenta, las elecciones en la segunda mitad de la década y al principio de los noventa arrojaron resultados muchas veces sorprendentes, que pusieron en estado de alerta a políticos y comentaristas de todo el continente:

* Ponencia presentada en el Seminario Internacional "Los límites a la consolidación democrática. Una aproximación a los casos de América Latina", Salamanca, 13 y 14 de junio de 1994. Una versión anterior de este trabajo fue presentada en el Congreso de LASA en Atlanta (marzo 1994).

** Miembro del Instituto de Estudios Iberoamericanos, Hamburgo.

Con pocas excepciones perdieron los candidatos presidenciales de los partidos gobernantes, a veces de una manera muy humillante (Perú, Brasil).

En la mayoría de los países disminuyó la participación electoral –en algunos países en una forma drástica, como por ejemplo en Colombia y Venezuela– o quedó estancada en un nivel bajo como es el caso de muchos países centroamericanos.

En algunas elecciones arrasaron candidatos nuevos –*newcomers*–, sin base partidaria fuerte y escasa trayectoria política. Fernando Collor de Mello en Brasil y Alberto Fujimori en Perú son los casos más conocidos.

La baja en la participación electoral y el auge de candidatos nuevos fueron interpretados como indicadores de una pérdida de confianza en los políticos tradicionales. Existen más indicios de un desencanto político: en encuestas de opinión pública los actores e instituciones políticas reciben muchas veces una evaluación muy negativa, eso se aplica especialmente a los partidos políticos, que en algunos países tienen una imagen peor que los militares. Se puede hablar ya de una verdadera *desidentificación con el sistema de partidos* y de una *desconfianza global respecto a la eficacia de la acción política* (Paramio, 1993/ 1994:19).

El desenlace de las elecciones presidenciales en Venezuela (diciembre de 1993) fue interpretado como un primer voto contundente de rechazo a la política neoliberal (Castañeda, 1993b), y el resurgimiento reciente de un movimiento de guerrilla en Chiapas en enero de 1994 y los disturbios políticos en Santiago del Estero, Argentina (en diciembre de 1993), donde fueron saqueadas y quemadas las sedes del poder ejecutivo, legislativo y judicial y algunos domicilios de políticos conocidos, reflataron las discusiones alrededor de las tensiones insuperables entre un sistema democrático y las políticas de ajuste económico (Borón, 1994).

Muchos comentaristas ponen en duda que sean posibles reformas económicas profundas en el marco de un sistema democrático, o que exista el peligro de un resurgimiento de regímenes autoritarios –no por casualidad últimamente se habla del *modelo Pinochet* (Codevilla, 1993)– o que la democracia sufra una deformación autoritaria, transformándose en una *democracia*

del ajuste (Raimondo/ Echegaray, 1993), una *democracia de baja intensidad*, una *democracia de fachada* (Solórzano, 1986) o una *delegative democracy* (O'Donnell, 1992), para mencionar algunos conceptos que están en boga para calificar los sistemas políticos en América Latina.

De hecho existe una tendencia en algunos países del continente de concentrar el poder de decisión en el poder ejecutivo, por ejemplo, por vía de un gobierno por decretos en vez de leyes, así casi se puede hablar de un *cesarismo democrático* (Whitehead, 1992: 151). Como caso extremo se presenta Perú, donde el presidente Fujimori en un autogolpe disolvió el congreso, imponiendo después una nueva constitución –aprobada por un escaso margen en un plebiscito– que en cierto sentido legitima su preponderancia política.

Antes de enfocar la pregunta de si existen relaciones causales entre los fenómenos políticos descritos y los cambios económicos por los que América Latina pasó en los últimos años, es necesario reflexionar un poco más sobre el alcance de los cambios electorales ya mencionados:

Primero, hay que aclarar que el cambio electoral y la sustitución de un partido de gobierno por otro no es *per se* un acontecimiento negativo. Por el contrario, demuestra que funciona el sistema democrático, que ayuda a solucionar conflictos políticos de una manera pacífica. El descontento social y político se puede canalizar hacia las elecciones y manifestarse en un voto de castigo contra el partido –o los partidos– de gobierno. La posibilidad de un cambio pacífico de gobierno marca la diferencia central entre un régimen autoritario y una democracia, y ofrece además una ventaja estructural que da más estabilidad a esta última. En un sistema autoritario de pronto una crisis económica puede convertirse en una crisis de legitimidad del sistema político.

Los acontecimientos de Chiapas seguramente tienen algo que ver con los rasgos autoritarios del sistema político mexicano. Con elecciones fraudulentas, el descontento político no se puede expresar por ese mecanismo y existe el peligro de que estalle de manera violenta para conseguir más *democracia a balazos* (Castañeda, 1994). Hay que anotar que también en Argentina los estallidos de violencia social acontecieron en provincias con es-

estructuras políticas atrasadas o arcaicas. Las encuestas llevadas a cabo después de los acontecimientos demostraron que las razones de los actos de violencia se basaron menos en la política neoliberal del gobierno central que en la corrupción y en el mal desempeño del gobierno provincial.

Partiendo de tal diagnóstico, la solución para la crisis social que atraviesan muchas regiones de América Latina no puede consistir en una restricción de la democracia, sino más bien en una profundización del sistema democrático para dar a la ciudadanía las herramientas que necesita para una purificación de la clase política. En ese contexto, los acontecimientos en Brasil y Venezuela, donde los mandatarios tuvieron que renunciar por corrupción y malversación de fondos públicos, son signos alentadores.

Ya ha bajado *el umbral de tolerancia* (Castañeda, 1993a) respecto a los vicios tradicionales de la política latinoamericana, especialmente con relación a la corrupción. Ese cambio de actitud tiene algo que ver con la política de ajuste: cuando hay menos fondos públicos para repartir y un alto porcentaje de la población vive en una situación económica bien precaria, baja la tolerancia hacia los pecados políticos. Probablemente hoy en día los políticos no son más corruptos que antes, pero hay menos paciencia en la ciudadanía y más control público. En eso juega un papel importante la prensa, especialmente la prensa escrita, que en muchos países ahora funciona como un cuarto poder público.

Según una interpretación optimista el cambio electoral puede ser interpretado como un indicio de madurez política: el electorado ahora juzga a los políticos menos en relación a sus palabras y más por sus rendimientos concretos. Además un debate político menos ideologizado libera al ciudadano en su voto, que en la actualidad está menos dirigido por afectos partidarios o por el peso de tradiciones ideológicas. Cuesta menos cambiar el voto y aumenta la volatilidad.

Hay que poner en duda interpretaciones que ven en las derrotas electorales de los partidos gobernantes –o, mejor dicho, de los partidos de los presidentes gobernantes– un fenómeno nuevo, que hace plausible atribuir las oscilaciones electorales a los cambios económicos recientes. Un estudio comparativo (Dix, 1984)

sobre las elecciones en América Latina antes de los años ochenta demuestra que también en las tres décadas anteriores hubo fuertes oscilaciones electorales, que resultaron muchas veces en derrotas de los partidos gobernantes.

Es posible que los cambios electorales tengan menos que ver con los desafíos que confrontan más o menos exitosamente los partidos gobernantes que con los sistemas presidenciales, que incluyen en la mayoría de los países latinoamericanos una cláusula de no reelección para los mandatarios. Esto supone que un presidente exitoso no tiene la posibilidad de presentarse a la reelección –por lo menos no para la elección siguiente– y en un sistema muy personalizado de elecciones es poco probable que se pueda transferir la imagen tal vez positiva del presidente saliente a otro candidato presidencial del mismo partido. Al mismo tiempo, por la lógica de la campaña electoral, muchas veces los candidatos del partido gobernante se ven obligados a distanciarse de la política del presidente saliente; disminuyendo de esa manera sus propias perspectivas electorales.

Muchas veces los presidentes ya empiezan su periodo con un apoyo minoritario o pierden ese respaldo político durante el transcurso de su mandato –por ejemplo, si hay elecciones parlamentarias en ese período. Un estudio reciente ofrece los siguientes resultados (Valenzuela, 1993: 7/ 8).

De los 33 presidentes electos en América Latina en la actual fase de redemocratización –la cual comenzó al inicio de la década de los ochenta–, menos de la mitad –14 para ser exactos– obtuvo mayorías electorales absolutas. 19 presidentes –56 por ciento– fueron electos con sólo una mayoría relativa del voto; cinco de ellos en realidad venían detrás de otros candidatos, para ser finalmente seleccionados como presidentes en desempates a través del voto popular o parlamentario... Sólo seis de los 33 presidentes latinoamericanos mencionados arriba –18 por ciento– tuvieron éxito en mantener mayorías parlamentarias en ambas cámaras del Congreso a través de sus periodos, aunque 13 –39 por ciento– comenzaron sus periodos con mayoría.

Cuando los presidentes latinoamericanos comienzan su periodo con un apoyo político tan débil o en descenso no hay que

asombrarse ante los cambios frecuentes en el color político de los mandatarios en las siguientes elecciones.

Cambios electorales y cambios económicos

En la segunda mitad de los años ochenta hubo un cambio profundo en el modelo económico predominante en América Latina. Fue remplazado el modelo de sustitución de importaciones, que suponía un mercado interno protegido por altos aranceles y un Estado que intervenía muy fuertemente en la economía. El nuevo modelo económico apunta a establecer y mantener una economía de mercado, abierta hacia el exterior, donde se respetan ciertas reglas de disciplina macroeconómica y en la que el Estado cumple un papel menos importante. En una lectura amplia, esas reformas forman parte del así llamado *consenso de Washington* (Williamson, 1993), refiriéndose a reformas económicas *sugeridas* a los países de América Latina por los poderes fácticos ubicados en Washington. Desde una perspectiva más polémica y en una versión más conservadora u ortodoxa se trata de *reformas neoliberales*, respecto a la diferencia entre el *consenso de Washington* y una política neoliberal (Williamson, 1993: 1334).

Al final todos los países tomaron con diferentes matices el nuevo rumbo económico, el cual produjo en una fase principal una contracción del producto económico –con diferencias entre los países y excepciones– y un aumento drástico de la pobreza. Pero hay que preguntarse si estos costos sociales fueron solamente un resultado del ajuste económico o más bien una consecuencia inevitable del agotamiento del modelo económico anterior. En los años ochenta, 16 de 19 países latinoamericanos sufrieron una reducción de su PIB per cápita. En 1990 fue en promedio un 11.5 por ciento más bajo que en 1980; en 6 de 19 países el PIB per cápita fue más bajo que en 1970. Pero hubo grandes variaciones entre los países de América Latina: en Argentina, Perú y Venezuela por ejemplo el PIB per cápita bajó alrededor de 20 por ciento entre 1980 y 1990, en Colombia y Chile subió entre un 18 por ciento y un 9 por ciento, respectivamente (CEPAL, 1994: 188-189). Los salarios reales bajaron en América Latina entre 1980 y 1990 según sector económico en

promedio entre un 20 por ciento –industria– y un 40 por ciento –sector informal– (ILO 1993: 24). Según las estadísticas de la CEPAL (1993: 100) en 1990 vivían 196 millones de latinoamericanos en pobreza, casi la mitad (46 por ciento) de la población, y una cuarta parte de la población (22 por ciento) se encontraba en un estado de extrema pobreza.

Las reacciones del electorado ante las políticas de ajuste económico fueron muy dispares: hay países donde los partidos que encabezaron el proceso de reformas económicas recibieron un respaldo fuerte y otros países donde sufrieron derrotas electorales. Hay que suponer que existen por un lado diferencias cualitativas en las políticas de ajuste, y que por el otro esas políticas partieron de situaciones económicas y políticas muy distintas.

Hay que partir de la tesis de que el espacio de maniobra de un gobierno depende de la profundidad de la crisis. En ese sentido situaciones de hiperinflación en la percepción colectiva constituyen experiencias especialmente traumáticas. También el fracaso de ensayos anteriores de estabilización económica tienen una repercusión. Cada reforma fracasada amplía la base de respaldo para una reforma más radical. “Las reformas son acumulativas; una dosis más fuerte se necesita para suavizar la desesperación agregada.” (Przeworski, 1991: 186). La población se parece a un enfermo que por sus dolores y por los síntomas de enfermedad –por ejemplo, una hiperinflación– cada vez acepta un remedio más fuerte, hasta una intervención quirúrgica que pone en peligro su vida.

Para la actitud de la población también son de importancia los puntos de referencia o de comparación para la evaluación de la situación actual, en el entorno nacional pero también en otros países y las alternativas políticas percibidas, más importante que la evaluación de la situación actual son las expectativas hacia el futuro. Para los electores argentinos el punto de comparación de la situación económica en los tiempos de ajuste del presidente Carlos Menem son el caos económico y la hiperinflación de los últimos meses del gobierno de Raúl Alfonsín. Debido a esa comparación los radicales, como partido de oposición más importante, tampoco son percibidos como una alternativa políti-

ca convincente. Carlos Andrés Pérez tuvo la mala suerte de que su segundo gobierno fuera comparado con su primer gobierno en el tiempo de oro en Venezuela.

Otro factor clave es la estrategia de reforma. Desde una perspectiva política la mejor estrategia consiste en un ajuste traumático *-shock-* al principio del periodo de gobierno, esperando una recuperación económica en el tiempo que queda hasta el final del mandato presidencial. Investigaciones comparativas (Remmer, 1993; Przeworski, 1991: 167) sugieren un enfoque de análisis que atribuye a los gobiernos un capital político que tiene su máximo valor al principio del periodo presidencial y que vence alejándose de la fecha de la transmisión de mando.

Ni siquiera una buena estrategia para el ajuste garantiza el apoyo político. En todo proceso de ajuste económico *-también si finalmente tiene éxito-* hay *costos de transición* (Przeworski, 1991: 136ff) que son inevitables. Por eso, un gobierno que inicia un proceso de ajuste necesita *standing power* para *aguantar* las repercusiones negativas del cambio económico *-aumento de cesantía, baja de sueldos, aumento de pobreza, etcétera.* La capacidad de *aguante* de un gobierno no depende solamente de su voluntad política sino también del sistema y de la infraestructura política. Es mucho más difícil continuar con la política de ajuste en una constelación con un sistema de partidos fraccionado que en una constelación con un partido mayoritario que tiene un fuerte arraigo en las organizaciones sociales. Éste es, por ejemplo, el caso del gobierno de Menem y del peronismo en Argentina. Además es más fácil resistir a los tiempos difíciles con un mandato largo y elecciones solamente al final del periodo presidencial, que con un mandato corto y con elecciones cada cierto tiempo, como por ejemplo, en Ecuador donde cada dos años el parlamento es renovado casi en su totalidad y el presidente tiene un mandato de sólo cuatro años. También en Argentina la renovación parcial del congreso cada dos años creó muchos problemas al gobierno de Alfonsín. Entonces el éxito o fracaso electoral de un gobierno reformista *-en el campo económico-* tiene mucho que ver con la sincronización o desincronización del ciclo de ajuste y recuperación económica con el ciclo electoral.

En un estudio publicado recientemente Philip (1993: 556/567f.) hace hincapié en la importancia de instituciones políticas centralizadas para el éxito de la política de reforma económica, que incluye la capacidad de los presidentes de ejecutar las reformas por la vía de decretos –como fue el caso en Bolivia y Argentina (Philip, 1993: 567)– en vez de leyes sancionadas por el poder legislativo. Después de comparar la política de reformas económicas en ocho países de América Latina, Philip (1993: 568) llega a la siguiente conclusión provocativa: “Cuando se observa estos ocho países (*sic*) hay una correlación simple y efectiva entre dominio presidencial del sistema político y efectividad de los procesos de adopción de políticas neoliberales”. Se debe tomar en cuenta este argumento en la discusión actual sobre las presuntas deficiencias de los sistemas presidenciales y las bondades del parlamentarismo. Hay que preguntarse si en la coyuntura económica difícil de los años ochenta y al principio de los años noventa sistemas parlamentarios habrían sido más eficientes. Es posible que en diferentes circunstancias prueben su eficacia diferentes sistemas políticos, o como escribe Philip (1993: 568): “sin embargo esto significa que gran parte de la literatura sobre democratización en América Latina –en boga hasta muy recientemente– ahora parece obsoleta. Las *transiciones pactadas* pueden haber ayudado a disolver las tensiones que surgieron –en gran medida– de la Guerra Fría, pero ellos no han ayudado en la toma de decisiones políticas efectivas posteriormente. Demasiado consenso puede inducir a la indecisión en la adopción de políticas...”

Hay que preguntarse si la tesis que establece un nexo causal entre el ajuste económico y los fenómenos de inestabilidad o crisis política enfoca la temática de una manera contundente. Según esa interpretación, es la modernización económica –muchas veces evaluada negativamente– la que produce inestabilidad política. Pero es posible partir de la tesis alternativa: la falta de una modernización política como complemento de una modernización económica es la que genera inestabilidad política. Desde esta perspectiva, los últimos estallidos de violencia, ya sea en Argentina o México, no fueron tanto, o solamente en parte, rebeliones causadas por el descontento económico y social sino que se dirigieron contra estructuras políticas deficientes e incrustadas.

Ésta es, por ejemplo, la tesis del renombrado diario suizo *Neue Zürcher Zeitung* (16.17.1.94, 1) –que no tiene fama de ser especialmente radical en sus planteamientos– sobre los acontecimientos en Chiapas. En un editorial de primera página se plantea:

Chiapas y los ejemplos de los países grandes de América del Sur demuestran que es necesario llevar adelante la tan cacareada renovación liberal al mismo tiempo en el campo económico y en el político; donde no se cumple esta regla se desencadenan tensiones sociales que pueden conllevar a estallidos de violencia. Casi todos los presidentes latinoamericanos hablan con frecuencia y con mucho gusto sobre economía de mercado y democracia, sería necesario comprometerlos con ambas metas. (traducido por Detlef Nolte)

Ya no se pone en duda la democracia como sistema político, lo que sí se discute es la calidad de las democracias latinoamericanas. Una verdadera democracia garantiza a los ciudadanos no solamente una ciudadanía política restringida al derecho de voto –y de organizarse– sino que incluye también la igualdad ante la ley *de jure y de facto*. Esta garantía en muchos países de América Latina todavía no existe. Según la definición de O'Donnell (1993: 161) son *democracias con baja intensidad de ciudadanía (democracies of low-intensity citizenship)*.

Cambios sociopolíticos y partidos políticos

Si no fueron los cambios económicos los que causaron los trastornos políticos descritos, probablemente son los cambios sociales originados por la política económica que complican la vida de los actores políticos. Nadie puede poner en duda que en el decenio pasado hubo cambios sociales tremendos en América Latina, los que todavía presentan un desafío para los actores políticos. Además hay que darse cuenta de que ya desde los años sesenta América Latina recorrió un proceso de cambio social profundo. Como ilustración se presentan solamente algunas cifras: el porcentaje de la población urbana aumentó de 49 por ciento (1960) a 72 por ciento (1990). En 1960 todavía trabajaban en promedio un 50 por ciento de la PEA en la agricultura, en 1985 solamente lo hizo un 36 por ciento. El analfabetismo bajó de 44 por ciento en 1950 a 15 por ciento en 1990 y la tasa de escolarización a nivel

primario subió de 65 por ciento (1960) a 87 por ciento (1990), y a nivel secundario de 19 por ciento (1960) a 55 por ciento (1987) (CEPAL, 1991).

En los últimos años fuimos testigos de una interacción compleja de esos cambios sociales a largo plazo con las repercusiones sociales del ajuste económico. Todavía hacen falta estudios empíricos sobre la nueva estratificación social de los países latinoamericanos en los años noventa y las repercusiones políticas de los cambios sociales, por ejemplo, respecto al comportamiento político de los diferentes estratos sociales. Hay que partir de la hipótesis de una estructura social más heterogénea y más desintegrada, con signos de anomia, que se manifiesta, por ejemplo, en estallidos espontáneos de violencia social –disturbios, saqueos, etcétera– o en un aumento drástico de la delincuencia. Como efectos políticos hay que contar con un aumento de la apatía política y con una debilitación de todas las organizaciones sociales y políticas. Pero al mismo tiempo aumenta la exigencia de estructuras o mecanismos de integración social. Esa demanda se puede expresar, entre otras manifestaciones, en un auge de movimientos y líderes carismáticos que actúan como *salvadores* –hay que recordar que Carlos Menem usaba como *slogan* electoral alusiones bíblicas como *Síganme* o *Argentina, levántate y anda*– o en un *parroquialismo partidario* (Echegaray, 1993) con el auge de partidos locales o regionales. Hay que suponer un desfase entre el cambio social, las expectativas transformadas del electorado y la oferta programática de los partidos políticos que nacieron en otra constelación socioeconómica. Además, en muchos países los partidos políticos durante los gobiernos militares sufrieron un periodo donde quedaron *congeladas* sus estructuras. El riesgo político-electoral debe ser grande para partidos políticos con una base social restringida, porque ya no existen los ambientes socioculturales homogéneos de antes.

Por otro lado hay que recordar que la heterogeneidad de las sociedades latinoamericanas ya en el pasado fue mencionada como una de las causas para la base policlasista de la mayoría de los partidos latinoamericanos (Dix, 1989). Entonces el reciente proceso de diferenciación y transformación social como conse-

cuencia del ajuste económico no debe ser de antemano un factor que complique demasiado la vida de esos partidos.

Pero los partidos políticos no solamente tienen que hacer frente a los cambios económicos y sociales, también hay cambios profundos en el modo de hacer política y en las relaciones entre la sociedad civil y el Estado. Quedó obsoleta la así llamada *state-centric matrix* (Cavarozzi, 1992; 1994), en la cual el quehacer del Estado tuvo una relevancia directa para las perspectivas de bienestar personal de una gran parte de la población. En esa constelación fue imprescindible para los actores sociales influir sobre la política estatal. El cambio en el papel del Estado como consecuencia de las políticas neoliberales tiene repercusiones directas para los partidos como organizaciones de mediación entre la sociedad y el Estado. Confrontado con el desafío doble de cambios en la base social de la política y en lo que constituyó el eje central de la política, los partidos se ven obligados a cambiar su repertorio tradicional de estrategias y a diseñar nuevos mapas cognitivos para sus electorados (Lechner, 1993; Paramio, 1993/94: 23-24).

A pesar de todos los cambios profundos en la estructura social y en las pautas de acción política en los países latinoamericanos es necesario ser cauteloso con un pronóstico sobre las repercusiones de dichos cambios en el campo político, especialmente con relación a los partidos políticos. Estudios comparativos (Mair, 1993) sobre el cambio electoral y la supervivencia de partidos tradicionales en Europa demuestran más continuidad que cambio, a pesar de los cambios sociales profundos que hubo en las últimas cuatro décadas, y a pesar de toda la literatura científica sobre la crisis de los partidos políticos y el auge de los nuevos movimientos sociales. Hay que tomar en cuenta los resultados europeos cuando se estudia la relación entre el cambio socioeconómico y el cambio político, en el sentido que

Aún tendemos a pensar sobre la política como una relación más o menos automática de lo social. Entonces cuando la sociedad cambia, automáticamente asumimos que las políticas también cambian y entonces, cuando las fronteras que definen a la clase u otros agregados sociales se vuelven borrosas, asumimos que el cambio electoral debe seguir inevitablemente. En consecuencia, una nueva estructura de

clases y nuevos patrones sociales y demográficos implican inevitablemente una nueva política. Sin embargo, mientras que esto puede ser verdadero respecto a cuestiones que dividen a los partidos y que las diferencias políticas sustantivas cambian de acuerdo con nuevos problemas sociales no implican necesariamente la emergencia de nuevos partidos políticos (Mair, 1993: 129).

No disponemos de los mismos estudios comparativos para América Latina, donde hay además otros tipos de partidos y donde los ciclos electorales fueron muchas veces interrumpidos por regímenes autoritarios o alterados por elecciones fraudulentas. Pero los resultados europeos deberían ser tomados como advertencia para no fijarse demasiado en el análisis de los resultados de una sola elección y concentrarse exclusivamente en los fenómenos de cambio, lo que lleva el riesgo de no advertir los elementos de continuidad política. Además hay que diferenciar bien entre los *fenómenos transicionales* (Cavarozzi, 1994: 144) que forman parte de cada proceso de transformación económico-social y cambios duraderos en el comportamiento político.

Puede ser fructífero cambiar el enfoque del análisis y tratar los partidos no solamente como objetos pasivos que reciben los impactos negativos del cambio socioeconómico, sino más bien como actores independientes, que tienen la capacidad de adaptarse a los cambios descritos e influir de una manera activa en su entorno socioeconómico. Se puede evocar un artículo sumamente estimulante de Giovanni Sartori (1969), publicado ya hace 25 años con el título *From the sociology of politics to political sociology*, donde abogó: “con referencia específica al tópico de partidos, una verdadera sociología política reclama una exploración simultánea de cómo los partidos están condicionados por la sociedad y cómo la sociedad está condicionada por el sistema de partidos.” En la tradición de Sartori (1969) y sobre la base de los resultados de sus propias investigaciones sobre el desarrollo de los sistemas de partidos en Europa escribe Mair (1993: 130-131):

Los partidos son capaces, al menos en parte, de modelar los espacios en los cuales compiten. Así, mientras la base social del partido soporta el cambio... de acuerdo con los cambios de la estructura social; y mientras las políticas y prioridades de los partidos y los gobiernos cambian... de acuerdo con los nuevos problemas, conflictos y compro-

mismos sociales; entonces, a su vez, los partidos adaptan y modifican sus apelaciones y sus métodos para movilizar apoyos.

Con ese nuevo enfoque sería interesante analizar en el contexto latinoamericano por qué algunos partidos tienen o tenían la capacidad de sobrevivir y adaptarse a nuevas condiciones socio-políticas y otros no. ¿Qué tipo de partido, en qué sistema de partidos y con qué estrategia tiene más oportunidad de una adaptación exitosa? O variando el título de un libro de Cavarozzi y Garretón (1989), ¿dónde están las razones de la muerte o de la resurrección en algunos casos permanente de diferentes partidos? Si la longevidad de los partidos es un indicador de la adaptabilidad de los mismos (Dix, 1992), entonces en América Latina tenemos suficientes muestras de esa capacidad. Existe un gran número de partidos que ya fueron fundados en el siglo pasado como, por ejemplo, el Partido Liberal y el Partido Conservador en Colombia, los Blancos y los Colorados en Uruguay, o el Partido Radical en Argentina, otros que fueron fundados en los años treinta o cuarenta, como, por ejemplo, el Partido Socialista de Chile o el Partido Justicialista en Argentina. Todos esos partidos todavía existen o están incluso en el gobierno. Hay que suponer que ya en el pasado lograron adaptarse con éxito a cambios estructurales en el campo económico o social. Un caso en la actualidad que despierta mucho interés científico es el desarrollo del Partido Justicialista en la presidencia de Carlos Menem. Hubo un cambio programático radical hasta el pedido de ingresar en la internacional demócrata-cristiana, y un cambio profundo en el modelo económico vigente. Como resultado del ajuste económico hubo trastornos sociales y un cambio en el patrón social del país. A pesar de esas transformaciones, el partido gobernante pudo conservar su caudal electoral.

Parece que esta afirmación está en contradicción con otro fenómeno: en la discusión científica sobre el tema existe un cierto consenso de que a pesar de los cambios profundos de los últimos años en el campo económico y social, las estructuras de intermediación política han cambiado poco. Este veredicto vale de una manera especial para los partidos políticos. Se han conservado más bien muchos de los rasgos tradicionales, mencionados como debilidades de los partidos latinoamericanos, como son

el clientelismo y su fraccionamiento, la concentración del poder en sus cúpulas, el corporativismo, el personalismo, la falta de un programa claro, la heterogeneidad de su base electoral, etcétera. Probablemente estamos confrontados con una situación contradictoria. Es posible que algunos de esos rasgos puedan complicar la adaptación a un entorno socioeconómico en proceso de cambio. Pero al mismo tiempo recordando el famoso *blessing in disguise* de Albert O. Hirschman otras *debilidades* de los partidos políticos ayudan en el proceso de adaptación.

En un periodo donde los viejos conceptos políticos y económicos han perdido validez y donde la estructura social se transforma en una manera profunda, la falta de un programa elaborado, la heterogeneidad de la base social, el fraccionamiento en diferentes corrientes y la importancia de líderes –a veces carismáticos– facilitaban un cambio de orientación de los partidos políticos sin rupturas organizacionales. Además hay indicios, que también ciertos vicios políticos, como el clientelismo –tal vez con otros actores– son adaptables a diferentes contextos sociopolíticos, no desaparecieron con la política neoliberal (Gamarra, 1994: 7-8). De nuevo se presenta el ejemplo del Partido Justicialista en Argentina. La importancia del liderazgo personal en el peronismo y su ambivalencia ideológica facilitaban el cambio de rumbo de ese partido durante el gobierno de Carlos Menem, que además instrumentalizó las estructuras corporativistas y el clientelismo, pero de una manera muy selectiva, para sostener el proceso de cambio.

Una nueva agenda política para los noventa

Para bien o para mal ni el derrumbe del socialismo real ni el éxito del ajuste económico son el prelude del *fin de la historia*. Solamente en una visión derrotista o simplista la política se reduce a la aplicación de recetas económicas prefabricadas, muchas veces impuestas desde fuera. Según esa visión, ya no quedarían temas socioeconómicos de importancia por los que pelear. Solamente algunos indígenas en el sur de México por su presunto atraso cultural todavía no habrían captado el signo de los tiempos que corren.

No hay fin de la historia, al menos si se parte de la posición de que la lucha por una sociedad más justa y con menos desigualdad social es un motor de la historia. En ese campo queda mucho espacio de acción para los partidos políticos y movimientos sociales que toman esa bandera programática. El consenso básico alrededor del nuevo modelo económico en cierto sentido facilita abogar por tal política. El así llamado *consenso de Washington* que últimamente se ha transformado en una *convergencia universal* (Williamson, 1993) se refiere solamente a ciertas políticas que son necesarias para establecer y mantener una economía de mercado, abierta hacia afuera, y en la que se respeten ciertas reglas básicas de disciplina macroeconómica. Ese consenso ni prescribe ni prohíbe una política de redistribución de ingresos, que en última instancia depende de decisiones valorativas:

La división política fundamental sobre temas económicos no es entre capitalismo y socialismo, o entre libre mercado e intervención estatal, sino entre aquellos que tratan de promover una equitativa distribución del ingreso *la izquierda* y aquellos que tratan de defender los privilegios establecidos por *la derecha*... Hacer algo para remediar las vergonzosas desigualdades de la región será el mayor reto para la izquierda, escribe el autor que ha introducido el concepto del *consenso de Washington* en la discusión científica (Williamson, 1993: 1331/1333f.)

La desigualdad social en América Latina abre un campo amplio para una política de redistribución de ingresos y lo hace al mismo tiempo imprescindible. No hay posibilidad de consolidar la democracia en sociedades marcadas por una desigualdad social tan grande que ha sido caracterizada por un autor como una situación de *apartheid social* (Weffort, 1993). Hay que acordar con Jorge Castañeda cuando escribe (1993a) "los grandes obstáculos que enfrenta la democratización cabal de América Latina... provienen del pecado original de una región desolada por el peor de los estigmas: la desigualdad que la caracteriza, más que a cualquier otra parte del mundo. Existen zonas más pobres, pero ninguna más injusta." Entonces, la tarea en adelante consiste, como la define el ex presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti (1994), en que: "La democracia política ya no es cuestionada. Lo que sí se le exige, cada día más, es que procure proyectar al terreno social la

igualdad política que da el voto”, complementando la ciudadanía política con una ciudadanía social.

La brecha entre ricos y pobres ya era muy amplia en América Latina antes de la crisis económica de los años ochenta y de las correspondientes políticas de ajuste, y se profundizó después. Pero terminada la fase dura del ajuste, donde hay poco espacio de maniobra no quedan pretextos para eludir el tema de la equidad social y dar muestras de una disposición de cambio. “Dicho de otra forma: una relativa estabilidad de los precios es un gran logro tras una etapa de hiperinflación, pero si la estabilidad se hace algo habitual, los ciudadanos, previsiblemente, querrán recuperar el poder adquisitivo perdido y esperarán medidas de redistribución...” (Paramio, 1993/ 94: 26).

Lamentablemente en muchos países no existen indicios de voluntad política real para enfocar el tema de la redistribución de ingresos. Llama la atención que la idea de utilizar los impuestos directos como un mecanismo para la redistribución de ingresos casi haya desaparecido de la agenda política en América Latina (Bird, 1992: 29-30). Aún peor, entre 1985 y 1991, la tasa de impuesto sobre la renta en la categoría fiscal más alta fue reducido en el término medio de 18 países latinoamericanos de un 47 por ciento a un 36 por ciento (*IMF Survey*, abril 4, 1994, 111).

La experiencia chilena demuestra que es posible combinar un modelo económico de apertura comercial e integración en la economía mundial con una política social que reduzca la pobreza. Según cifras oficiales el número de pobres se redujo entre marzo de 1990 y marzo de 1994 de 5.3 millones a 4 millones de personas o de más de 40 por ciento a alrededor de 30 por ciento de la población (Ruiz-Tagle, 1993; *El Mercurio*. Edición Internacional, 20.26.1.1994, 5). Además se realizó un fuerte aumento del gasto social y se logró una reducción de la cesantía y un aumento significativo de los salarios reales, especialmente de los salarios mínimos (Meller *et al.*, 1993). Estos resultados prueban que a pesar de todas las restricciones económicas impuestas internamente o desde afuera la orientación política de los gobiernos sí hace una diferencia en los resultados políticos. En Chile gobernó una coalición demócrata-cristiana-socialdemócrata, que se comprometió con el modelo de una economía social de mercado.

Chile, en donde el proceso de cambio económico ya empezó mucho antes que en los otros países latinoamericanos, parece revelar que el futuro de los países en proceso de ajuste económico no debe ser tan negativo. Pero el desenlace depende de la voluntad política de aprovechar el espacio para una política social más activa, o aún para una política de redistribución de ingresos, política que todavía hace falta en Chile, en el marco del modelo económico predominante.

Es un poco curioso que hoy en día en las publicaciones de instituciones financieras como el Fondo Monetario o el Banco Mundial a veces aparecen posiciones más progresistas que en los programas de muchos partidos de gobierno en América Latina. Así, por ejemplo, en uno de los últimos informes quincenales del Fondo Monetario (*FMI Survey*, 4.4.1994) está incluido un reporte que se refiere a una investigación reciente del Departamento de Estudios Fiscales del FMI sobre diferentes procedimientos que se pueden usar para gravar más a las personas con altos ingresos. La vida tiene aún más sorpresas. En su discurso en la reunión anual del BID, en Guadalajara en abril de 1994, el subsecretario de hacienda de Estados Unidos, Lawrence H. Summers, entre otras cosas abogó para que el banco pueda ayudar a los gobiernos en la reestructuración de la legislación laboral para garantizar sindicatos más fuertes y más independientes.

Además, existe un amplio consenso en instituciones prestigiosas como el Diálogo Interamericano, la CEPAL y el Banco Mundial, el que no tiene fama de tomar posiciones izquierdistas, sobre el hecho de que la distribución de ingresos en América Latina es mucho más desigual que en los países de la OECD o en otras regiones del Tercer Mundo, ni que hablar de los tigres asiáticos, que reciben tanto elogio en círculos neoliberales (para estadísticas sobre la distribución de ingresos en América Latina y en comparación con otras regiones del mundo, véase CEPAL, 1993; Worldbank, 1990; 1992; 1993). Por eso se aboga por una política paliativa de la pobreza extrema y por un cambio de rumbo hacia una distribución más equitativa. Hay que evocar también el famoso *crecimiento con equidad* de la CEPAL.

De los desafíos sociales que fueron especificados antes se deduce que una evaluación global de las políticas neoliberales

tiene que incluir la fase de posajuste: para calificar como exitosa tal política no es suficiente que se haya logrado una estabilización en los indicadores macroeconómicos –precios, etcétera– sino más bien hay que averiguar si esas políticas han creado la base para un crecimiento sustentado que aumente el bienestar de la población, y no solamente de sectores reducidos, y si se ha consolidado el sistema democrático (Paramio, 1993/ 94: 19; Bresser Pereira/ Maravall/ Przeworski, 1994: 182).

A pesar de toda la discusión respecto a una revolución ideológica en América Latina hay que poner en duda la tesis que el neoliberalismo hoy en día tiene la hegemonía ideológica en América Latina. Encuestas de opinión pública demuestran que eso no es así ni siquiera en el caso del país pionero de las políticas neoliberales Chile (Halperin/ Bousquet, 1993). Hay que recordar (Naim, 1993: 135) que muchas veces las políticas neoliberales fueron llevadas a cabo por políticos como Carlos Andrés Pérez, Carlos Menem y Alberto Fujimori que ganaron las elecciones no justamente con plataformas neoliberales. En el único caso donde hubo un voto directo de la ciudadanía sobre políticas neoliberales, esas políticas fueron rechazadas por un amplio margen: en Uruguay votaron en un plebiscito en diciembre de 1992 –con una participación electoral del 83 por ciento– más del 70 por ciento de los electores contra una ley de privatización de la compañía estatal de telecomunicación (ANTEL). Este voto no solamente fue un voto explícito contra dicha ley, sino que más bien fue un voto de castigo o de rechazo contra toda la política económica del gobierno.

Hay que afirmar con toda claridad que la agenda política en lo que queda de los años noventa ya no es la agenda del neoliberalismo. El marco de acción de los partidos políticos ya no se delimita a la ejecución de políticas de ajuste económico. Y el ajuste no implicó el fin de la política, sino más bien el comienzo de otro ciclo político con nuevos desafíos y discusiones respecto a las soluciones adecuadas. Según un autor “se trataría de pasar de la fase fácil de la modernización, en la que el neoliberalismo ha proporcionado el discurso legitimador, a la modernización difícil” (Paramio, 1993/ 94: 27).

Al lado de los temas ya mencionados, como son la pobreza y la redistribución de los ingresos, han emergido más temas nove-

dosos y urgentes, que no tienen lugar en liturgia neoliberal y en cierto sentido son resultados de las políticas de ajuste económico. En la mayoría de los países latinoamericanos hay un deterioro tremendo en los sistemas educativos que recarga el futuro desarrollo económico (Bresser Pereira/ Maravall/ Przeworski, 1994: 193-194). Hay problemas serios en el sector de la salud, y problemas en la infraestructura vial y sanitaria. El 30 por ciento de la población latinoamericana no tiene electricidad, un tercio no tiene alcantarillado, 25 por ciento no tiene acceso a agua potable y casi la mitad de las carreteras están en malas condiciones (Naim, 1993: 141). Esos problemas confrontan a los Estados latinoamericanos con graves desafíos financieros que pueden poner en peligro de nuevo la recién lograda disciplina fiscal.

Además después de una fase de reducción de las funciones y tareas del Estado en América Latina –incluyendo la privatización de empresas públicas– hoy en día es obvio que el Estado necesita más capacidades regulatorias que antes (Acuña/ Smith, 1994: 21-22) y nuevas herramientas para dar apoyo al sector industrial en una situación internacional en muchos aspectos adversa. Es posible que ya hayamos entrado en una fase de rehabilitación y fortalecimiento del Estado, como la describe un autor venezolano de una manera provocadora “Latinoamérica ha gastado los últimos diez años en demoler el Estado y gastará los próximos diez en reconstruirlo” y “... el futuro de las reformas del mercado latinoamericano dependerá de la velocidad con la cual el Estado sea rehabilitado y fortalecido” (Naim, 1993: 133/ 150).

La crisis económica y social que confrontan muchos países de América Latina tiene una doble cara: debilita estructuras políticas y estrecha el espacio de maniobra de los políticos, pero al mismo tiempo abre un campo de acción, que puede ser aprovechado por *entrepreneurs* políticos para abordar innovaciones políticas y económicas, explotando el descontento acumulado por la crisis. Con este trasfondo se van a aumentar en el futuro las perspectivas electorales de partidos que sepan adaptarse al nuevo entorno posneoliberal para abordar el proyecto de extender la modernización económica a nuevas áreas y de complementar y legitimar las reformas económicas con políticas redistributi-

vas. En las elecciones pos-neoliberales ya no se discutirán las reformas económicas ya llevadas a cabo en el marco del *consenso de Washington*, sino más bien los partidos políticos tendrán que diseñar sus estrategias electorales en torno a las consecuencias políticas y sociales de esas reformas y de las pautas de un desarrollo económico sustentado. El autor comparte la esperanza de Paramio (1993/ 94: 28) de “que habrá espacio para la consolidación de proyectos políticos que combinen modernización y solidaridad”.

Hay que ver qué tendencias demuestran las elecciones más recientes en América Latina.

Reflexiones sobre los resultados de las elecciones más recientes en América Latina y perspectivas hacia el futuro

Con las elecciones presidenciales en Ecuador en mayo de 1992 comenzó un nuevo ciclo electoral en América Latina. En 1993 se realizaron elecciones presidenciales en cinco países (Bolivia, Paraguay, Honduras, Venezuela y Chile), en 1994 se celebran elecciones presidenciales en ocho países (Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Colombia, México, Brasil, Uruguay) y en 1995 seguirán Argentina, Perú y Guatemala. El ciclo electoral terminará en febrero de 1996 con las elecciones presidenciales en Nicaragua. De los resultados de las elecciones ya llevadas a cabo se desprenden las siguientes conclusiones:

1. Las elecciones dan una prueba de la heterogeneidad política del continente y de las diferencias en el Estado de la democracia en los distintos países de América Latina: en Paraguay las elecciones presidenciales –mayo 1993– todavía formaron parte de la transición de un sistema autoritario de larga vida a una democracia con enclaves autoritarios fuertes y por ello deben ser evaluadas desde esta perspectiva. Las elecciones generales en Venezuela en diciembre de 1993, documentaron la crisis política del país. El descontento del electorado se manifestó en un alto porcentaje de abstenciones –más del 40 por ciento– y en una derrota humillante de los dos partidos políticos que dominaron la política venezolana desde hace 25 años. El otro extremo lo presenta Chile –diciembre 1993–, donde el candidato de la coalición gobernante recibió el respaldo de casi el 60 por ciento del

electorado y la tasa de participación superó el 90 por ciento, con voto obligatorio. En El Salvador –marzo/ abril 1994– ojalá hayamos sido testigos de elecciones fundacionales de un sistema político más democrático después de una guerra civil de más de diez años, pero donde participó solamente la mitad de los votantes inscritos a pesar de la importancia de las elecciones. La baja participación electoral puede ser interpretada como un signo de que la democracia todavía no tiene un arraigo fuerte en ese país.

2. Los resultados electorales de los últimos años en general no dan prueba de un voto de rechazo a la política de ajuste o al modelo económico predominante. No ha sido el caso en las elecciones presidenciales en Ecuador de 1992, donde ganó un candidato con una propuesta muy liberal; ni en Bolivia –mayo 1993–, donde terminó como ganador el candidato del partido que empezó con todo el proceso de transformación económica en ese país; ni en Paraguay –mayo 1993–, donde ganó un empresario rico con un programa de liberalización económica –sus competidores tampoco ofrecieron una propuesta económica antiliberal–; ni en Argentina en las elecciones parlamentarias –parciales– de octubre de 1993, donde los peronistas conservaron su caudal electoral como partido más fuerte –43 por ciento–, la primera vez que sucede esto en las elecciones parciales del cuarto año presidencial; ni en Chile, donde en las elecciones presidenciales casi el 90 por ciento de los votos fueron para candidatos que aceptan el modelo económico vigente en sus diferentes matices; ni en Colombia, donde en las elecciones parlamentarias –marzo 1994– ganó el partido de gobierno, y la alternativa más opuesta al modelo económico vigente, el ADM-19, sufrió una derrota aplastante; ni en las elecciones presidenciales colombianas –mayo 1994–, donde los dos candidatos más importantes no se diferenciaron demasiado en su enfoque económico, ni se apartaron demasiado de la corriente dominante; ni en Ecuador –mayo 1994–, donde como ya es habitual en las elecciones parlamentarias a medio tiempo del mandato presidencial el partido de gobierno sufrió una derrota humillante, pero los resultados de los partidos de oposición solamente pueden en parte ser interpretados como voto en contra de la política neoliberal del gobierno. Por un lado triunfaron partidos con una posición muy crítica respecto a

esa política, pero por otro lado como partido más fuerte fue confirmado un partido que se distingue solamente en matices del partido de gobierno.

3. Es posible interpretar el voto en Honduras –noviembre 1993– o en Costa Rica –febrero 1994– como un voto a favor de una política con más énfasis social, pero sin poner en cuestión el modelo económico marco. En Panamá, el candidato triunfante del PRD intentó aprovecharse de la reputación social del régimen de Omar Torrijos. En la segunda vuelta en Colombia el candidato vencedor trató de perfilarse como representante de un *capitalismo social*. Y en Chile en las elecciones de diciembre de 1993 fue confirmado el modelo exitoso de una economía social de mercado. Las elecciones en Chile demuestran que confrontado con las alternativas de una opción neoliberal pura y un modelo de economía social de mercado ganó la segunda opción con un amplio margen de diferencia.

4. Es un fenómeno interesante que entre los candidatos triunfadores en las elecciones presidenciales haya varias personalidades que antes de su carrera política tuvieron éxito como empresarios y entraron tarde en la política. Son candidatos como Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, Carlos Wasmosy en Paraguay, Eduardo Frei en Chile y José María Figueres en Costa Rica. Eso indica que la imagen de los empresarios no puede ser tan mala en esos países. Parece que en el electorado de algunas de las democracias latinoamericanas ahora existe más confianza en las capacidades técnicas de empresarios transformados en políticos que en los políticos más tradicionales. Ese cambio de percepción sin duda tiene algo que ver con el cambio en el modelo económico predominante, en el que hoy en día se necesita más un administrador eficiente que un político del estilo tradicional.

5. Solamente el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela, en diciembre de 1993, se podría interpretar como un voto de rechazo a la política de ajuste económico y al modelo económico predominante en América Latina. Pero allá hubo una combinación entre una crisis económica y una crisis de credibilidad de la clase política tradicional. Además está por verse qué política económica va a trazar finalmente el nuevo gobierno.

6. Algunas de las elecciones más recientes son casos muy especiales y por eso la interpretación de los resultados se aparta de la discusión respecto a las repercusiones de las políticas neoliberales. Enfocando de nuevo las elecciones en Colombia hay que advertir que fracasó de nuevo el intento de cimentar una tercera fuerza política al lado de los dos partidos tradicionales. En El Salvador las elecciones –marzo/ abril 1994– en cierto sentido fueron el punto final del proceso de paz, y el gobierno de turno se apropió del dividendo de paz en las elecciones. En las elecciones en Panamá –mayo 1994– tuvo influencia la herencia de la intervención norteamericana de 1989. Y finalmente las elecciones aún no resueltas de la República Dominicana –mayo 1994–, en algunos aspectos, y por sus personajes principales, tienen más que ver con las novelas de García Márquez que con la política latinoamericana de los umbrales del siglo XXI. Contrariamente a las elecciones en la mayoría de los otros países latinoamericanos, en esas elecciones sí hubo graves irregularidades que fueron confirmadas por misiones de observación electoral internacionales.

Hamburgo, agosto de 1994.



BIBLIOGRAFÍA

- ACUÑA, Carlos H. y William SMITH. "The Political Economy of Structural Adjustment: The Logic of Support and Opposition to Neoliberal Reform", en *Smith et al.*, 1994, 17-66.
- ALCÁNTARA, Manuel. "Un esquema de análisis para el estudio de los partidos políticos en procesos de transición: fundación frente a tradición", ponencia preparada para las Jornadas de Debate: "Quince años de cambio político en Centroamérica", Facultat de Ciències Politiques i Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 28-29.1.1994a, mimeo.
- . "¿Por qué no la segunda república argentina?", en *América Latina Hoy*, 7, 1994b, 81-87.
- BAÑO, Rodrigo. "Estructura socioeconómica y comportamiento colectivo", en *Revista de la CEPAL* 50, 1993, 181-199.
- BIRD, Richard M. "Tax Reform in Latin America: A Review of Some Recent Experiences", en *Latin American Research Review* 27.1, 1992, 7-36.
- BLACK, Jan Knippers. "Elections and other trivial pursuits: Latin America and the New World", en *Third World Quarterly* 14.3, 1993, 545-554.
- BORON, Atilio A. "Modelos en Crisis", en *Página 12*, Buenos Aires: 15.1.1994, 6.
- BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos, José María MARAVALL, y Adam PRZEWORSKI. "Economic Reforms in New Democracies: A Social-Democratic Approach", en *Smith et al.*, 1994, 181-212.
- CARR, Barry y Steve ELLNER (eds.). *The Latin American Left. From the Fall of Allende to Perestroika*, Boulder: San Francisco/ Londres, 1993.
- CASTAÑEDA, Jorge. "Democracia en Latinoamérica", en *El País*, Madrid: 16.7.1993a, 13.
- . "Primeros votos contra el ajuste", en *Clarín*, Buenos Aires: 16.11.1993b, 21.
- . *Utopia Unarmed: The Latin American Left After the Cold War*, Nueva York: 1993c.
- . "Democracia a balazos", en *Página 12*, Buenos Aires: 16.1.1994, 22.
- CAVAROZZI, Marcelo. "Beyond Transitions to Democracy in Latin America", en *Journal of Latin American Studies* 24, 1992, 665-684.
- . "Transformaciones de la política en la América Latina contemporánea", en *Análisis Político*, Bogotá, No. 19. 1993, 25-38.

- . "Politics. A Key for the Long Term in South America", en Smith *et al.*, 1994, 127-156.
- y Manuel Antonio GARRETÓN (eds.). *Muerte y resurrección. Los partidos políticos en el autoritarismo y las transiciones en el Cono Sur*, Santiago de Chile, 1989.
- "CHIAPAS ein Fanal für Lateinamerika?", en *Neue Zürcher Zeitung*, 16/ 17.1, 1994, 1.
- CEPAL. "Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe 1989", Santiago de Chile, 1989.
- . "Nota sobre el desarrollo social en América Latina (Notas sobre la economía y el desarrollo, Nos. 511/ 512)", Santiago de Chile, 1991.
- . "El perfil de la pobreza en América Latina a comienzos de los años 90", Santiago de Chile, 1992.
- . "Panorama social de América Latina", Santiago de Chile, 1993.
- . "Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean 1993", Santiago de Chile, 1994.
- CODEVILLA, Angelo. "Is Pinochet the Model?", en *Foreign Affairs* 72.5, 1993, 127-140.
- COPPEDGE, Michael. "Parties and Society in Mexico and Venezuela. Why Competition Matters", en *Comparative Politics* 25.3, 1993, 253-275.
- CRABTREE, John. "The Peruvian Congressional Elections of 1992", en *Electoral Studies* 12.3, 1993, 264-267.
- DAHL, Robert A. "Social Reality & 'Free Markets'. A Letter to Friends in Eastern Europe", en *Dissent*, primavera, 1990, 224-228.
- DALY HAYES, Margaret. "Political Parties and Representation in the Post-Authoritarian Era. A Rapporteur's Report" (Woodrow Wilson Center. Latinoamerican Program. Working Paper, No. 200). Washington D.C., 1992.
- DIX, Robert H. "Incumbency and Electoral Turnover in Latin America", en *Journal of Interamerican Studies and World Affairs* 26.4, 1984, 435-448.
- . "Cleavage Structures and Party Systems in Latin America", en *Comparative Politics* 22.1, 1989, 23-37.
- . "Democratization and the Institutionalization of Latin American Political Parties", en *Comparative Political Studies* 24.4, 1992, 488-511.
- ECHEGARAY, Fabián. "¿Adiós al bipartidismo imperfecto? Elecciones y partidos provinciales en la Argentina", en *Nueva Sociedad* 124, 1993, 46-52.

- ESPAÑA, Luis Pedro. "Después de la rasca viene el ratón", en *SIC*, Caracas 57.561, 1994, 10-15.
- ESPINOSA, Rosario. "Development, neoliberalism and electoral politics in Latin America", en *Development and Change* 23.4, 1992, 27-48.
- GAITÁN, Pilar. "Algunas consideraciones acerca del debate sobre la democracia", en *Análisis Político*, Bogotá 20, 1993, 47-57.
- GAMARRA, Eduardo A. "Market-Oriented Reforms and Democratization in Latin America: Challenges of the 1990s", en Smith *et al.*, 1994, 1-16.
- GARRETÓN, Manuel Antonio (ed.). *Los partidos políticos en el inicio de los noventa. Seis casos latinoamericanos*, Santiago de Chile, 1992.
- . *Los partidos y la transformación política de América Latina*, Santiago de Chile, 1993.
- HALPERN, Pablo y Edgardo BOUSQUET. "Opinión pública y el rol del Estado en la economía", en *Revista de Ciencia Política* 15.1-2, 143-167, Santiago de Chile, 1993.
- HOJMAN, David E. "The Political Economy of Recent Conversions to Market Economics in Latin America", en *Journal of Latin American Studies* 26, 1994, 191-219.
- IDB (INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK), 1990. "Economic and Social Progress in Latin America", Washington D.C., Report, 1990.
- . Address by Mr. Lawrence H. Summers, "Temporary Alternate Governor for the United States of America and Under Secretary for International Affairs", Department of the Treasury at the Third Plenary Session, Guadalajara, México, 12 de abril de 1994.
- IIDH/ CAPEL. *Boletín Electoral Latinoamericano*, San José, 1989.
- ILO (INTERNATIONAL LABOUR OFFICE). *World Labour Report 1993*, Ginebra, 1993.
- INTER-AMERICAN DIALOGUE. "Convergence and Community. The Americas in 1993", a report of the Inter-American Dialogue, The Aspen Institute, Washington D.C., 1993.
- KINZO, Maria D'Alva Gil. "The 1989 Presidential Election: Electoral Behaviour in a Brazilian City", en *Journal of Latin American Studies* 25, 1993, 313-330.
- LASERNA, Roberto. "Integración y gobernabilidad. Los nuevos desafíos de la democracia en Bolivia", en *Nueva Sociedad* 128, 1993, 120-131.
- LECHNER, Norbert. "Las sombras del mañana", en *Colección Estudios CIEPLAN*, Santiago de Chile, 37, 1993, 69-75.

- LINZ, Juan y Arturo VALENZUELA (eds.). *The Failure of Presidential Democracy. The Case of Latin America*, v.2, Baltimore, Londres, 1994.
- MAINWARING, Scott. "Presidentialism, Multipartism, and Democracy. A Difficult Combination", en *Comparative Political Studies* 26.2, 1993, 198-228.
- MAIR, Peter. "Myths of electoral change and the survival of traditional parties", en *European Journal of Political Research* 24, 1993, 121-133.
- MARTÍNEZ-LARA, Javier. "The Brazilian Plebiscite of 21 April 1993", en *Electoral Studies* 12.4, 1993, 403-407.
- MARTZ, John D. "Colombia. Democracy, Development, and Drugs", en *Current History*, marzo de 1994, 134-137.
- MCDONALD, Ronald H. y J. Mark RUHL. *Party Politics and Elections in Latin America*, Boulder. Londres, 1989.
- MELLER, Patricio, Sergio LEHMANN y Rodrigo CIFUENTES. "Los gobiernos de Aylwin y Pinochet: Comparación de indicadores económicos y sociales" (apuntes CIEPLAN No.118), Santiago de Chile, 1993.
- MUNCK, Ronaldo. "After the Transition: Democratic Disenchantment in Latin America", en *European Review of Latin American and Caribbean Studies* 55, 1993, 7-19.
- MURARO, Heriberto. "¿Cuál es el pacto entre la gente y los políticos?", en *Clarín*, Buenos Aires, 18.1.1994, 13.
- NAIM, Moises. "Latin America: Post-Adjustment Blues", en *Foreign Policy* 92, 1993, 133-150.
- NOHLEN, Dieter y Mario FERNÁNDEZ (eds.). *Presidencialismo versus parlamentarismo. América Latina*, Caracas, 1991.
- NOLTE, Detlef. "Gobiernos locales y participación política en América Latina: Procesos de descentralización y cambios electorales", en *Verfassung und Recht in Übersee/ Law and Politics in Africa, Asia and Latin America* 25.1, 1992a, 21-36.
- NUN, José. "Democracy and modernization. Thirty years later", en *Latin American Perspectives* 20.4, 1993, 7-27.
- O'DONNELL, Guillermo. "Delegative Democracy?", Kellog Institute. Working Paper 172, University of Notre Dame, Ind., 1992.
- . "On the State, Democratization and Some Conceptual Problems: A Latin American View with Glances at Some Postcommunist Countries", en *World Development* 21.8, 1993, 1355-1369.
- PARAMIO, Ludolfo. "Consolidación democrática, desafección política y neoliberalismo", en *Cuadernos del CLAEH* 18.68, Montevideo, 1993-94, 15-28.

- PASQUINI DURÁN, José M. "Más subversivo será usted", en *Página 12*, Buenos Aires, 5.2, 1994, 4.
- PHILIP, George. "The new economic liberalism and democracy in Latin America: friends or enemies?", en *Third World Quarterly* 14.3, 1993, 555-571.
- PRZEWORSKI, Adam. *Democracy and the market. Political and economic reforms in Eastern Europe and Latin America*, Cambridge, 1991.
- RAIMONDO, Ezequiel y Fabián ECHEGARAY. "Repensando la democracia desde el ajuste: una perspectiva crítica", en *Nueva Sociedad*, 113, Caracas, 1991, 84-90.
- REMMER, Karen L. "The Political Impact of the Economic Crisis in Latin America in the 80s", en *American Political Science Review* 85.3, 1991, 777-800.
- . "The Political Economy of Elections in Latin America, 1980-1991", en *American Political Science Review* 82.2, 1993, 393-407.
- RUIZ-TAGLE, Jaime. "Reducción de la pobreza y distribución de los ingresos en Chile", en *Mensaje*, 425, Santiago de Chile, 1993, 640-643.
- SANGUINETTI, Julio María. "La democracia en América Latina", en *El País*, 4.1. Madrid, 1994, 13.
- SARTORI, Giovanni. "From the Sociology of Politics to Political Sociology", en S.M. Lipset (ed.), *Politics and the Social Sciences*, Nueva York: 1969, 65-100.
- SCHMITTER, Philippe C. "Dangers and Dilemmas of Democracy", en *Journal of Democracy* 5.22. 1994, 57-74.
- SILVA, Patricio. "State, Politics and the Idea of Social Justice in Chile", en *Development and Change* 24, 1993, 465-486.
- SMITH, William C. "Reestructuración neoliberal y escenarios políticos en América Latina", en *Nueva Sociedad*, 126, Caracas, 1993, 25-39.
- , Carlos H. ACUÑA y Eduardo A. GAMARRA (eds.). *Latin American Political Economy in the Age of Neoliberal Reform. Theoretical and Comparative Perspectives for the 1990s*, New Brunswick/ Londres, 1994.
- SOLORZANO MARTÍNEZ, Mario. "Centroamérica: democracias de fachada", en *Polémica*, 12. San José, 1996, 41-55.
- SOSA, Arturo A. "El bonche electoral", en *SIC*, 57.561, Caracas, 1994, 5-8.
- STEPAN, Alfred y Cindy SKACH. "Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation. Parliamentarism versus Presidentialism", en *World Politics* 46, 1993, 1-22.

- SUNKEL, Osvaldo. "Un enfoque neoestructuralista de la reforma económica, la crisis social y la viabilidad democrática en América Latina", trabajo presentado al XVIII Congreso Internacional de LASA, Atlanta 10-12.3.1994.
- THIBAUT, Bernhard. "Presidencialismo, parlamentarismo y el problema de la consolidación de la democracia en América Latina", en *Estudios Internacionales*, 26.102. Santiago de Chile, 1993, 216-252.
- TIRONI, Eugenio y Ricardo A. LAGOS. "Actores sociales y ajuste estructural", en *Revista de la CEPAL* 44, 1991, 39-54.
- "Trend Rises Toward Taxing High-Income Earners", en *IMF Survey*, abril 4, 1994, 97/ 111-112.
- TURNER, Frederick C. y Marita CARBALLO DE CILLEY. "Equality and Democracy", en *International Social Science Journal* 136, 1993, 271-283.
- VALENZUELA, Arturo. "Latin America: Presidentialism in Crisis", en *Journal of Democracy* 4.4, 1993, 3-16.
- WEFFORT, Francisco. "What is a 'new democracy'", en *International Social Science Journal* 136, 1993, 245-256.
- WHITEHEAD, Laurence. "The Alternatives to 'Liberal Democracy': a Latin Perspective", en *Political Studies* 50 (Special Issue: Prospects for Democracy), 1992, 146-159.
- WILLIAMSON, John. "Democracy and the 'Washington Consensus'", en *World Development* 21.8, 1993, 1329-1336.
- WOLFE, Marshall. "Las estructuras sociales y la democracia en los años noventa", en *Revista de la CEPAL* 40, 1990, 56-71.
- WORLD BANK. *World Development Report 1990*, Washington D.C., 1990.
- . *Poverty and income distribution in Latin America: The Story of the 1980s*, Latin America and the Caribbean Technical Department. Human Resources Division, Washington D.C., 1992.
- . *World Development Report 1993*, Washington D.C.